



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 352/2024/1

///nos Aires, de octubre de 2024.

**AUTOS Y VISTOS:**

Para resolver en el presente incidente de falta de acción  
**CPE 352/2024/1** formado en el marco del expediente caratulado:

**infracción ley 27.430”** del registro de este Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a mi cargo, Secretaría N° 10;

**Y CONSIDERANDO:**

1.- Se formó el presente incidente con motivo del planteo de excepción de falta de acción articulado por [REDACTED] en su carácter de Presidente de [REDACTED] (titular de la C.U.I.T. N° [REDACTED]), junto con sus letrados defensores [REDACTED], por inexistencia de delito, advirtiendo que la acción no fue legalmente promovida.

Por aquella presentación, se afirmó que la presunción del ardid o engaño sobre la que se basa la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos fue eliminada legalmente por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/23, y por la sanción de la ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, invocando con esta referencia normativa una causal de inculpabilidad y de impedimento de la penalidad que fundamenta la aplicación del artículo 2° del Código Penal.

Señaló asimismo que la sanción de aquellas normas devela el inequívoco propósito de desregular de manera total del control del Estado por sobre la voluntad de las partes en un contrato en materia laboral, y que el actual artículo 23 de la Ley de Contratos de Trabajo deroga la presunción de una relación laboral denunciada por el Fisco.

En ese contexto, aludió que el Derecho Laboral contiene presunciones que en determinados casos suponen la existencia de un contrato de trabajo. Teniendo en cuenta estas definiciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos concluyó que habría existido una subordinación técnica, económica y jurídica, lo que acreditaría relaciones laborales de dependencia.



Sin embargo, la reforma del artículo 23° de la Ley de Contratos de Trabajo, resultaría -para la defensa técnica de la contribuyente- derogatoria de la presunción sostenida por el organismo recaudador, y llevaría inequívocamente a la desincriminación de los hechos reprochados en estas actuaciones.

En ese marco, señaló que la ley N° 27.742 se encuentra vigente, y de existir alguna medida cautelar que dispusiera su inaplicabilidad, se debe recordar que aquella disposición estuvo vigente en el título correspondiente a las modificaciones en materia de regulación laboral del DNU N° 70/23, desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 3 de enero de 2024, fecha del dictado de la medida cautelar por parte de la Sala de FERIA de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (cfr. expte. N.° 56.862, "Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Incidente", res. del 3 de enero de 2024).

Por tanto, se alegó que la acción penal no debió haber sido promovida ni evidentemente puede ser seguida, ya que *"...la AFIP, organismo gubernamental, conoce la norma y no debió nunca en consecuencia haberla desobedecido"*.

2.- Con relación a dicho planteo, se corrió vista a las partes interesadas en los términos previstos por el artículo 340 del Código Procesal Penal de la Nación.

La Fiscalía interviniente manifestó que corresponde rechazar la excepción de falta de acción interpuesta, por considerar que aquélla no procede en tanto no surge como manifiesta y evidente la inexistencia de delito, que alega el presentante, teniendo en cuenta además lo controversial de las normas cuya aplicación se pretende en los términos del artículo 2° del Código Penal.

La parte querellante solicitó se rechace la falta de acción planteada, por improcedente, toda vez que, por un lado, la supuesta independencia de los monotributistas ha sido desvirtuada en el marco de la fiscalización llevada adelante contra la empresa y, por otro lado, la deuda determinada se ha efectuado sobre "base cierta" y no sobre presunciones incompatibles con el proceso penal, habiéndose practicado el ajuste sobre el apoyo de la prueba producida en sede administrativa y tenido en consideración los montos efectivamente





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 352/2024/1

facturados por los trabajadores sobre los que se alcanzó certeza del vínculo laboral.

En tal contexto de cosas, la querella afirmó que si bien frente a la facturación de los profesionales, correspondería presumir autonomía, justamente en el presente caso se ha logrado desvirtuar la presunción contenida en el artículo 23 de la Ley de Contratos de Trabajo que alega la defensa.

3.- Con posterioridad a aquellas presentaciones, la defensa de [REDACTED] amplió sus manifestaciones y esgrimió que la modificación establecida por la ley N° 27.742 al artículo 23 de la Ley de Contratos de Trabajo, implica un cambio de paradigma en cuanto a la concepción legal, doctrinaria y jurisprudencial del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, con un alto impacto en la causal que originó estas actuaciones.

En esta oportunidad, afirmó que la Administración Federal de Ingresos Públicos en ningún momento contestó el planteo formulado vinculado a la existencia de una ley más benigna sancionada con posterioridad a los hechos denunciados, lo cual, refiere, generó una causal de inculpabilidad y de impedimento de la prosecución de la acción.

Expresa nuevamente, que para el caso de autos ya no opera la presunción que dio inicio y que sostiene la presente acción. Alega, en tal sentido, que: *"...es necesario observar el impacto que la nueva norma establece sobre el Derecho Penal. Si la ley laboral y el Derecho de la Seguridad Social ya no pueden presumir contrato de trabajo cuando un autónomo inscripto factura, se le extienden recibos y cobra en blanco, mucho menos puede considerarse que en ese caso se produce una evasión de aportes y contribuciones encubierta a través de contratos falsos como ensaya la hipótesis delictiva..."*.

Por lo que solicita, tenga por presentada la réplica a la contestación de la vista corrida por el juzgado en la incidencia.

4.- Que, corresponde recordar que el objeto procesal de las actuaciones principales se circunscribe a la presunta omisión de ingresar al Sistema Único de la Seguridad Social los montos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a los que se



#39250354#425801377#20241014150022319

encontraría obligada [REDACTED], con motivo de no haber declarado 579 trabajadores en relación de dependencia, con el correlativo perjuicio a la Administración Federal de Ingresos Públicos, correspondientes a los períodos 01/2017 a 08/2018, hechos que fueron configurados en el tipo penal previsto y reprimido por los artículos 5° y 6° del Régimen Penal Tributario, establecido por el artículo 279 de la ley N° 27.430, los cuales superan la condición objetiva de punibilidad prevista por la normativa citada.

A raíz de la fiscalización y determinación de oficio iniciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (O.I. N° [REDACTED]), se concluyó que la contribuyente de autos intentó en los períodos en trato efectuar una maniobra simulatoria de profesionales independientes bajo la figura del monotributo, con el objeto de eludir el pago de sus obligaciones previsionales.

De esta manera, los ajustes practicados por el organismo fiscalizador en el marco de la mencionada Orden de Intervención, son los que se refieren a continuación:

01-2107	\$ 231.933,01	\$ 351.506,53	\$ 583.439,54
02-2017	\$ 190.183,10	\$ 288.227,88	\$ 478.410,98
03-2017	\$ 200.536,29	\$ 303.919,53	\$ 504.455,82
04-2017	\$ 233.394,38	\$ 353.716,13	\$ 587.110,51
05-2017	\$ 299.431,08	\$ 453.798,92	\$ 753.230,00
06-2017	\$ 533.671,31	\$ 808.807,80	\$ 1.342.479,11
07-2017	\$ 558.263,18	\$ 846.075,54	\$ 1.691.792,95
08-2018	\$ 672.531,39	\$ 1.019.261,56	\$ 1.691.792,95
09-2019	\$ 672.639,61	\$ 1.019.424,84	\$ 1.692.064,45
10-2017	\$ 649.174,17	\$ 983.859,59	\$ 1.633.033,76
11-2017	\$ 723.752,43	\$ 1.096.889,83	\$ 1.820.642,26
12-2017	\$ 778.919,60	\$ 1.180.497,94	\$ 1.959.417,54
01-2018	\$ 1.300.673,13	\$ 1.971.246,30	\$ 3.271.919,43
02-2018	\$ 717.446,18	\$ 1.072.424,46	\$ 1.789.870,64
03-2018	\$ 869.739,95	\$ 1.300.081,59	\$ 2.169.821,54
04-2018	\$ 1.043.435,63	\$ 1.559.726,23	\$ 2.603.161,86
05-2018	\$ 1.234.159,33	\$ 1.844.817,65	\$ 3.078.976,98
06/208	\$ 1.689.077,18	\$ 2.524.834,60	\$ 4.213.911,78
07-2018	\$ 1.457.636,98	\$ 2.178.877,77	\$ 3.636.514,75
08-2018	\$ 1.817.313,22	\$ 2.716.519,23	\$ 4.533.832,45
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>\$ 15.873.911,15</b>	<b>\$ 23.874.513,92</b>	<b><u>\$ 39.748.425,07</u></b>

5.- Ahora bien, cabe precisar en primer lugar que ha de advertirse, en relación a la excepción de falta de acción planteada,



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 352/2024/1

que los hechos alegados por el presentante no alcanzan a modificar, de momento, la situación fáctica por la cual con fecha 13 de mayo de 2024 el organismo fiscal promoviera denuncia penal contra los responsables de la firma [REDACTED], en relación al delito previsto por los artículos 5° y 6° establecido por la ley N° 27.430 (Título IX), en razón de haberse detectado por aquel órgano que se ha sustraído en forma fraudulenta del pago de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social, respecto de los períodos indicados por el considerando 4) de la presente.

Los antecedentes administrativos que originaron aquella hipótesis inicial dieron cuenta sobre una fiscalización realizada contra el contribuyente de mención, que tuvo por objeto analizar la presunción de una relación de dependencia laboral encubierta, bajo la forma del monotributo de 604 personas registradas en esta modalidad tributaria, las cuales facturaron sus servicios durante los períodos señalados.

A partir del análisis de elementos objetivos reunidos a lo largo de aquella fiscalización (facturación de la empresa, documentación relacionada con las prestaciones de los trabajadores involucrados, cruce de información de base de datos del órgano de contralor, numerosos testimonios de personas que surgían de los registros como monotributistas y aparecían facturándole servicios a la empresa -médicos laborales, de emergencias y de aeropuertos, enfermeras y acompañantes terapéuticos, entre otros-), el órgano administrativo denunciante llegó a la conclusión respecto de la existencia de una relación de dependencia laboral "encubierta" con relación a los trabajadores fiscalizados, sobre los que practicó el ajuste fiscal mencionado, habiendo determinado el hecho imponible de la obligación previsional denunciada en base a diversas conclusiones que enumeró en su denuncia.

En ese entendimiento, basó sus conclusiones conforme la normativa aplicable en la materia, prevista en el artículo 23 de la ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo.

En razón de la denuncia formulada, en los términos del artículo 177, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación, el Ministerio Público Fiscal impulsó en autos la acción penal pública



conforme lo previsto por los artículos 5° y 65 de aquel digesto procesal, frente a hechos presuntamente delictivos de acuerdo a los antecedentes administrativos acompañados y conforme la normativa aplicable en la materia.

Ahora bien, el presentante articula el planteo que origina esta incidencia en el entendimiento de que la acción no fue legalmente promovida -o no pudiere ser proseguida-, en los términos del artículo 339, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación.

Destáquese en primer término que los actores que iniciaron e impulsaron la presente acción penal pública, fundaron sus conclusiones en las probanzas reunidas a lo largo de un proceso de fiscalización de oficio, lo cual sostuvo la hipótesis delictiva enunciada en autos en los términos del artículo 180 del mismo rito.

En tal sentido, la defensa alega, en el planteo efectuado, una cuestión valorativa, que es ajena a una carencia adquisitiva para llegar a los fundamentos que fueron el objeto de una adecuada denuncia en los términos indicados y de un posterior requerimiento de instrucción conforme los lineamientos previstos en los artículos 5°, 65, 180 y 188 y concordantes del código enunciado.

6.- Atento la vía procesal articulada a fin de introducir dicho cuestionamiento, cabe observar que las excepciones son defensas de carácter formal para que la parte contra quien se sigue el proceso, pueda oponerse a la acción de las partes acusadoras.

Estos remedios previstos por el código ritual permiten a la defensa atacar directamente la relación procesal, ya sea para retrotraer el proceso a sus comienzos (nulidad) o para neutralizarla en su totalidad por medio de la extinción de la acción. *“La excepción es la contrapartida de la acción, por tanto ha de ser la vía por la cual se ataca la acción promovida y ejercida por el Ministerio Fiscal y el órgano jurisdiccional...”* (cf. Raúl Washington Ábalos *"Código Procesal Penal de la Nación"*, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, Argentina, 1994, páginas 761/762).

En ese contexto, se advierte que no se han señalado en la presentación de la defensa los defectos de forma que estima contrarios al orden público o a la buena administración de justicia que afectarían la promoción de la presente acción penal, dado que se





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 352/2024/1

limita a señalar cuestiones que hacen directamente a la valoración de la prueba incorporada en el proceso de fiscalización del órgano recaudador y no a la falta de ella, en todo caso, que podría dejar insustanciada la presente acción penal articulada contra el contribuyente de autos.

Aquellas cuestiones introducidas (valoraciones sobre la existencia o no de una relación de dependencia laboral vinculada a casi 600 trabajadores objeto de aquel proceso de fiscalización administrativo) deberán ser objeto de estudio y de comprobación de la hipótesis delictiva denunciada a lo largo de la instrucción en los autos principales, en los términos previstos por el artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación, momento en que se juzgará -de acuerdo a las reglas de la sana crítica- si las probanzas reunidas en autos son suficientes para estimar la existencia de un hecho delictivo.

En efecto, las situaciones fácticas que se intentan modificar (la existencia de una relación laboral que sustentaría en la materia la afirmación de un hecho imponible requerido para la aplicación de la norma penal prevista por el artículo 5° de la ley N° 27.430) integran una cuestión de hecho objeto de valoración y de prueba, y no se introduce por ello un obstáculo al ejercicio de la acción penal.

7.- Lo expuesto demuestra que la excepción de previo y especial pronunciamiento deducida por la defensa deviene improcedente, toda vez que las cuestiones alegadas se encuentran directamente vinculadas con la cuestión de fondo, que deberán ser materia de análisis y de prueba durante la instrucción en curso en los autos principales.

Y es que la excepción de falta de acción sólo procede ante los casos expresamente previstos en el artículo 339, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación, esto es, “... *porque no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiere ser seguida, o estuviere extinguida la acción penal*” pues, como su nombre lo indica, es una vía procesal de carácter excepcional.

En el presente caso, el medio excepcional empleado no resulta idóneo para la materialización del derecho invocado, pues no corresponde que la vía previa sea utilizada para lograr la anticipación



#39250354#425801377#20241014150022319

de decisiones que sólo pueden alcanzarse después de alegadas, probadas y debatidas las cuestiones que hacen a la delimitación del objeto del proceso.

En particular, la falta de acción por inexistencia de delito está destinada a aquellos supuestos en que se advierte de manera inequívoca la falta de adecuación de la conducta a las previsiones de la ley penal sustantiva, sin que sea necesaria la vía ordinaria destinada a la dilucidación de los hechos cuyo esclarecimiento requiere necesariamente el desarrollo de actividad probatoria.

En consonancia con lo expuesto, la doctrina ha sostenido que, para que prospere la excepción de falta de acción vinculada a la inexistencia de delito, ésta deberá resultar “*manifiesta de la mera descripción efectuada en el acto promotor (arts. 188, inc. 2º y 195)*”, por ende “*debe carecer inequívocamente de tipicidad objetiva*” y que “*debe quedar claro que este modo de excepcionar no admite debate por su vía acerca de cuestiones vinculadas al plano subjetivo. Tampoco tolera hechos controvertidos o la producción de prueba*” (cfr. Navarro, Guillermo R. y Daray, Roberto R., “Código Procesal Penal de la Nación”, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, tomo II, pág. 994), lo que -se reitera- no sucede en el presente incidente.

En tal sentido, corresponde recordar que la Alzada tiene dicho que: “... *es jurisprudencia reiterada de este Tribunal el que, como regla general, no puede cuestionarse la existencia del delito objeto de la investigación por vía de la excepción que se prevé por el artículo 339 inciso 2º, del C.P.P.N., pues aquel tema se vincula con la cuestión de fondo que se examina en el proceso principal y, en consecuencia, es parte del objeto de aquél... si bien la regla general recordada por el considerando anterior reconoce una excepción cuando de los elementos de conocimiento reunidos surge con total evidencia y de un modo indudable la inexistencia del hecho ilícito, en las circunstancias del caso no se advierte que se constituya alguna situación excepcional por la cual podría corresponder apartarse de la regla general en cuestión, pues la supuesta inexistencia del delito aludida por la parte recurrente se refiere, precisamente, a situaciones de hecho supuestas cuya dilucidación correcta es materia de investigación en los autos principales*” (cfr. Cámara Nacional de







Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 352/2024/1

Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “A”, incidente CPE 1265/2017/67/CA40, caratulado “INCIDENTE DE FALTA DE ACCION DE A., M. C. EN AUTOS: “W. E. S.A. Y OTROS SOBRE INFRACCION LEY 22415”, resolución de fecha 16 de septiembre de 2022).

Además, si bien tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido la procedencia de articular por vía de excepción de falta de acción la inexistencia de delito en aquellos supuestos en que los hechos denunciados no encuadrarían en una de las figuras típicas, ello se encuentra supeditado a que las circunstancias que la justifiquen surjan en forma **manifiesta y evidente** (cfr. D’ALBORA, Francisco J., ob. cit., págs. 427 y 428; ABALOS, Raúl W., “Código Procesal Penal de la Nación”, 2º Edición, 1994, pág. 762; C.N.C.P., Sala 3º, Reg. 715/01, y Sala 2º, Reg. N° 2213/98; C.N.C.C., Sala 2º, causa N° 29430, Sala 4º, causa “Fontevicchia”, Sala 5º, causa N° 28429; TOPE N° 3, “Eurnekian, Eduardo”, del 13/08/04, y C.N.A.P.E., Sala “A”, Regs. Nos. 60/2002, 758/2002 y 434/2011 y Sala “B”, Regs. Nos. 557/2008, 127/2013 y 198/2015, entre otros).

De ello se sigue que, la inexistencia de delito que invoca el presentante no resulta patente, clara o manifiesta, tal como se exige para habilitar la excepción que se intenta, lo que determina su rechazo.

En definitiva, de lo expuesto se colige que las cuestiones introducidas por la defensa deben ser tratadas en el marco de la instrucción que se lleva a cabo en el expediente principal -y no por conducto incidental-, ya que, de lo contrario, se desnaturalizaría la vía de excepción en desmedro de una eficaz administración de justicia.

**8.-** Aún si fuese formalmente admisible el planteo defensivo, debe señalarse en este punto que, si bien el 21 de diciembre de 2023 y el 8 de julio de 2024 fueron publicados en el Boletín Oficial el DNU N° 70/23 y la ley N° 27.742 respectivamente, en cuyos Título IV y V se aprobaron una serie de modificaciones en materia laboral (entre otras de la ley de Contratos de Trabajo N° 20.744), las previsiones referidas por la actual redacción del artículo 23



#39250354#425801377#20241014150022319

de la Ley de Contratos de Trabajo no logran modificar, de momento, la base normativa a partir de la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos sustentó el presente caso.

En esa línea, recuérdese que la redacción anterior del artículo 23 de la ley 20.744 establecía: *"Contrato de trabajo. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres"*.

Asimismo, cabe destacar que actualmente el artículo 23 de la ley N° 20.744 dispone: *"Presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social (Artículo sustituido por art. 89 de la Ley N° 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina)"*.

En primer lugar, se observa que las modificaciones realizadas a la norma que establece la presunción de existencia de contrato de trabajo, no han eliminado elementos permanentes ni coyunturales del tipo penal descripto en el artículo 5° del Título IX de la ley N° 27.430, toda vez que aquéllas de momento no implican una variación sustancial en las relaciones de trabajo bajo dependencia como objeto de la materia imponible necesaria para la subsunción del tipo penal que aquí se ventila.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 352/2024/1

Sentado lo anterior, es dable destacar que de la lectura del primer párrafo del artículo 23 modificado, surge que la regla general que se establece es la existencia de contrato de trabajo por el mero hecho de la prestación de un servicio. Ahora bien, para desvirtuar dicha regla general, el texto introducido por la ley N° 27.742 exige una contratación de obras, de servicios profesionales o de oficios, que se emitan los recibos o facturas correspondientes o que se efectúen los pagos según los sistemas bancarios reglamentarios.

De ello se colige que la presunción contenida en la primera parte del artículo 23 de la Ley de Contratos de Trabajo resulta ser "*iuris tantum*", por lo que -como bien sostuvo la defensa en el libelo que motivara la formación de esta incidencia- admite pruebas en contrario, las que deben ser merituadas en cada caso particular. Por lo que no es posible sostener que la modificación efectuada por la ley N° 27.742 derogue -en los términos expresados por la defensa- la presunción contenida en el primer párrafo del referido artículo.

9.- En esa inteligencia, se observa que de ningún modo aquel régimen que se intenta aplicar al presente caso importa una modificación de política criminal o una desincriminación de la conducta típica bajo estudio, que habilite la posibilidad de considerar a la nueva norma como ley más benigna en los términos del artículo 2° del Código Penal.

Ello así por cuanto se advierte claramente que esta nueva ley, en lo que hace al aspecto analizado, lejos de desincriminar la conducta que se considera punible, se limita a sentar las bases para regular y encausar el marco legal de las futuras relaciones laborales, actualizando ese tipo de contratos entre partes a la realidad económica actual; ello, con un claro objetivo de desregular posiciones en el mercado laboral a fin de estimular el desarrollo del mismo.

Para reforzar lo expuesto, puede destacarse que en las propias consideraciones del DNU N° 70/23 -el que sirvió de base para las modificaciones que luego se introdujeron mediante la ley N° 27.742- se desprende el objetivo de las modificaciones en las leyes de índole laboral, estableciéndose que "*... se modifican las Leyes Nros.*



#39250354#425801377#20241014150022319

14.250, 14.546, 20.744 (t.o. 1976), 23.551, 24.013, 25.345, 25.877, 26.727, 26.844 y 27.555 y se deroga la Ley N° 25.323, a los efectos de mejorar y simplificar los procesos de registración, darle seguridad jurídica a la relación laboral..." (cfr. considerandos del DNU N° 70/23, publicado el 21 de diciembre de 2023 en el Boletín Oficial).

De este modo, la nueva regulación de la ley N° 27.742 se vincula más con una decisión de políticas públicas que con establecer nuevas situaciones fácticas en el mercado laboral que pudieran implicar una desincriminación de conductas vinculadas a la omisión del pago de aportes y contribuciones correspondientes a los trabajadores que deberían considerarse bajo una relación de dependencia permanente, con las consecuentes cargas sociales que este régimen laboral impone con destino al Sistema Único de la Seguridad Social.

En virtud de lo expuesto, no se advierte de que manera la nueva regulación en materia laboral pudiere implicar una despenalización de los hechos de esta causa, en tanto la conducta típica prevista por el artículo 5° de la ley 27.430 no ha dejado de ser punible en virtud de los cambios legislativos señalados.

Es evidente, que con la modificación adoptada por el Congreso Nacional no se ha pretendido expresar un cambio en la valoración del comportamiento reprimido por el artículo 5° de la ley N° 27.430, sino simplificar o encausar las formas de contratación de personal para las empresas, con el fin último de mantener una política pública de desregulación en materia laboral.

**10.-** Ello conduce a recordar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que "... *La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional...*" (conf. C.S.J.N., E. 171. XXII. "Estado Nacional c/ Rudaz, Martín Alejo y otra s/ nulidad de resolución", rta. el 5/12/92).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 352/2024/1

En análogo sentido se ha dicho que “... *buscar el sentido de las normas jurídicas es ‘poner de acuerdo a la ley penal, abstracta y genérica por naturaleza, con lo concreto y variable del caso particular’ (Vincenzo Manzini en ‘Tratado de Derecho Penal’, citado por Carlos Creus ‘Derecho Penal. Parte General’, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 78), evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:300; 297:142; 300:1080 y 303:1041) ...*” (conf. Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, en causas n° 1510 “Córdoba Grande, Jorge Antonio s/ rec. de casación”, reg. 189/98, del 15/5/98; n° 1509 “Vázquez, Emilio Manuel s/ rec. de casación”; reg. 191/98, del 15/5/98; n° 340 “Papalardo, Gustavo Alberto s/ rec. de casación e inconstitucionalidad”, reg. 76/95, del 15/5/95; entre otras).

La omisión del pago de los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, genera un impacto en la integración de los fondos destinados al sistema de jubilaciones y pensiones, el cual protege a la población toda de las contingencias biológicas, patológicas y/o económico sociales, que pueden ocurrir durante la vida del ser humano. Ello acuerda razonabilidad a que el nuevo régimen laboral que pretende aplicarse en autos continua siendo las bases necesarias de protección para que aquel bien jurídico no se vea afectado.

En esa idea, es que se conjuga adecuada y suficientemente la gravedad de los hechos denunciados con la nueva normativa en materia de regulación de las relaciones laborales actuales.

En tal entendimiento, no se observa un cambio sustancial en el contenido disvalioso de las conductas contempladas en la ley penal tributaria (artículos 5° y 6°), las que se mantienen vigentes para sustentar la hipótesis delictiva de autos.

Por lo expuesto, entiende este tribunal que la reforma del artículo 23 efectuado por la ley N° 27.742 no importa una modificación sobre la valoración de la conducta de evasión de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, que implique



mayor benignidad en los términos del artículo 2° del Código Penal (artículo 9° del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 15° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

No puede concluirse sin señalar que las particularidades del derecho penal económico tornan a esta disciplina jurídica un terreno fértil para que se susciten este tipo de controversias interpretativas. Ello en razón de que los delitos incluidos en ese ámbito suelen regular materias vinculadas directa o indirectamente con el devenir económico de la sociedad. De modo tal que, receptar en forma automática la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna en estos casos implicaría, a futuro, privar al Estado de una herramienta muy valiosa para cumplir con su cometido de proveer al bien común.

**11.-** Por último, pese que habrá de rechazarse el planteo introducido por la defensa, en razón de que dicha parte pudo haber considerado que tenía razones plausibles para realizar el mentado requerimiento, se la habrá de eximir del pago de las costas.

Por todo lo expuesto y de conformidad fiscal,

**RESUELVO:**

**I.- NO HACER LUGAR** al planteo de excepción por falta de acción formulado por los doctores [REDACTED] y [REDACTED] abogados de [REDACTED], en la presentación de fecha 27 de agosto y 9 de septiembre de 2024; ello por las razones expresadas *supra*.

**II.- SIN COSTAS** (artículo 531, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, protocolícese y notifíquese a las partes. Agréguese una copia de lo aquí resuelto en los autos principales.

DIEGO ALEJANDRO AMARANTE

JUEZ

Ante mí:

MARIA INES DATO

SECRETARIA

